



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 6365/2014/3/CA3

///doba, 6 de agosto de 2025.

### Y VISTOS:

Estos autos: "**LEGAJO DE APELACIÓN EN AUTOS: LAGO, JOSE ERNESTO, INFANTE, RUBEN OMAR POR EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA**" (Expte. FCB 6365/2014/3/CA3), venidos a conocimiento de la **Sala B** del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por el Fiscal Federal de Río Cuarto y la representante de la querellante AFIP-DGI, en contra de la resolución dictada por el Juzgado Federal de Río Cuarto, con fecha 30 de agosto de 2024 en la que se dispuso: "RESUELVO: **1- Dictar AUTO DE FALTA DE MERITO** (cfme. art. 309 del CPPN) en favor de **José Ernesto LAGO**, y de **Rubén Omar INFANTE** (ya filiados precedentemente); en relación al hecho que le fuera oportunamente atribuido, esto es, *Evasión Agravada*, previsto en el artículo 2 inciso "a" de la Ley N° 24.769, en calidad de autores penalmente responsables (art. 45 del Código Penal); debiendo proseguir la investigación a su respecto, ello cfme. arts. 309, correlativos y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación".

### Y CONSIDERANDO:

**I.** El señor Juez Federal de Río Cuarto dictó la resolución, cuyo fragmento dispositivo obra transcripto precedentemente, por haber sido objeto de apelación por parte del Fiscal Federal de Río Cuarto y de la representante de la querellante AFIP-DGI -hoy ARCA-.

Para así resolver, tras efectuar un recuento de las decisiones jurisdiccionales dictadas en autos, el Magistrado sostuvo que luego de una exhaustiva valoración de la prueba hasta el momento incorporada en autos y siguiendo las reglas de la sana crítica racional, al momento no re-

Fecha de firma: 06/08/2025

Alta en sistema: 07/08/2025

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#39307725#465526378#20250806125937346

sulta posible alcanzar el grado intelectual que este estado procesal exige como para disponer un auto de procesamiento en contra de los imputados **José Ernesto Lago**, y de **Rubén Omar Infante**, así como tampoco ordenar su desvinculación definitiva del proceso en relación el delito de evasión agravada al Impuesto al Valor Agregado, correspondiente al período fiscal 2010.

Luego de efectuar una conceptualización de la figura achacada, el Juez indica que *"...la investigación no se encuentra agotada, existiendo medidas probatorias pendientes de diligenciar. De este modo, los indicios contundentes, concatenados e inequívocos reseñados permiten afirmar, cuanto menos, el mantenimiento de un estado de sospecha bastante que amerita la continuidad del proceso. Es decir, que hasta este momento y luego de analizadas las probanzas arrojadas al proceso no se puede afirmar, con el grado de certeza que la etapa requiere, que los encartados José Ernesto LAGO y Rubén Omar INFANTE hayan tenido la responsabilidad que la figura penal requiere para atribuirle su participación, pero, tampoco se puede afirmar que sean ajenos al hecho atribuido, razones estas que me llevan a declarar la falta de mérito en relación a ambos"*.

**II.** Contra ese pronunciamiento, los representantes del Ministerio Público Fiscal y del Organismo Fiscal, interpusieron recursos de apelación.

En su escrito, la representante de **AFIP-DGI**, expuso que la resolución puesta en crisis le causa agravio puesto que, a su entender, no se ha efectuado un correcto análisis de la prueba recabada, por lo cual, la falta de





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 6365/2014/3/CA3

mérito ordenada no resulta derivación razonada del derecho vigente.

Por su parte, el **Fiscal Federal interviniente** manifestó en su recurso que existen elementos de convicción suficientes para procesar a los imputados. Asimismo, expuso que el hecho de que contaran con asesoramiento contable del estudio Busso en relación a cuestiones impositivas, no los exime de responsabilidad penal y que, en tal sentido, cobra relevancia el testimonio de Thommen del cual se desprende la intervención y gestión que los directores de la empresa, Lago e Infante, habrían tenido en las cuestiones contables, financieras e impositivas, lo cual acredita, con el grado de probabilidad que esta etapa procesal exige, la existencia del hecho y la participación de los nombrados.

**III.** Radicados los presentes autos ante esta Cámara, los recurrentes presentaron por escrito la expresión de agravios de conformidad con el art. 454 del CPPN y el Acuerdo N° 276/2008, presentaciones a cuyo contenido remite el Tribunal.

Sintéticamente, en su informe, la **querellante AFIP-DGI**, reiteró los argumentos expuestos al momento de interponer el recurso de apelación y además agregó que con las pruebas aportadas por el síndico Thommen se está frente a un proceso que se encuentra a estas alturas con prueba reunida y elementos de convicción suficientes para dictar el procesamiento de los imputados, conforme el art. 306 del CPPN.

A su turno, el **Fiscal General** en su informe del art. 454 del CPPN, se agravia de la falta de mérito para José Ernesto Lago y Rubén Omar Infante, argumentando que la decisión del Juez carece de un razonamiento sólido y se

Fecha de firma: 06/08/2025

Alta en sistema: 07/08/2025

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#39307725#465526378#20250806125937346

basa en una valoración equivocada de la prueba y una interpretación errónea de la ley, que existen elementos de convicción que demuestran la participación de los nombrados, en su rol como directivos con poder de decisión y control, lo que implica responsabilidad penal más allá de la delegación de tareas contables, tal como surge del testimonio del síndico de GAMSUR SEM, que corroboró la injerencia de los imputados en las decisiones operativas y el conocimiento de la grave situación fiscal.

Asimismo, agregó que la investigación ya lleva ocho años, y la falta de mérito dilata la causa, por lo que el procesamiento es urgente y justificado por las pruebas actuales.

**IV.** Encontrándose las actuaciones en condiciones de ser resueltas, se sigue el orden de votación que surge del certificado actuarial obrante en autos.

**La señora Juez de Cámara, doctora Graciela S. Montesi, dijo:**

Llegan los presentes autos a esta instancia en virtud de los recursos de apelación interpuestos por el Fiscal Federal de Río Cuarto y la representante de la querellante AFIP-DGI -actualmente ARCA-, en contra de la resolución dictada por el Juzgado Federal de Río Cuarto, con fecha 30 de agosto de 2024, por medio de la cual dispuso la falta de mérito de los imputados **José Ernesto Lago** y **Rubén Omar Infante** en orden a la supuesta comisión del delito de evasión agravada del impuesto al valor agregado período fiscal 2010, conforme el art. 2 de la Ley 24.769, hoy art. 2 del Régimen Penal Tributario previsto por la Ley 27.430.





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 6365/2014/3/CA3

I. A los fines de emitir pronunciamiento en los presentes autos, ante todo, cabe aclarar que aquí se encuentra controvertida la responsabilidad y participación que cabría a los imputados José Ernesto Lago y Rubén Omar Infante, en los términos del art. 14 de la Ley 24.769, hoy art. 13 del Régimen Penal Tributario previsto por el art. 279 de la ley 27.430, toda vez que la fecha del hecho investigado los nombrados ostentaban cargos de directores y, por ende, habrían sido representantes y responsables de la empresa Gamsur SEM, tal como dejó sentado este Tribunal con fecha 9 de agosto de 2021 en los autos principales.

A propósito de esa cuestión, estimo pertinente traer a colación las consideraciones allí expuestas en torno a la llamada "**cláusula del actuar en lugar de otro**" que extiende la responsabilidad penal de la empresa a aquellas personas que hayan ejercido determinados cargos o funciones relevantes.

En efecto, en dicha oportunidad, mediante el voto del Dr. Abel G. Sánchez Torres, se dijo que *"cuando alguno de los hechos previstos en esta ley hubiere sido ejecutado en nombre, con la ayuda o en beneficio de una persona de existencia ideal, una mera asociación de hecho o un ente que a pesar de no tener calidad de sujeto de derecho las normas le atribuyan condición de obligado, la pena de prisión se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que **hubiesen intervenido en el hecho punible** inclusive cuando el acto que hubiera servido de fundamento a la representación sea ineficaz.*

---

Fecha de firma: 06/08/2025

Alta en sistema: 07/08/2025

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#39307725#465526378#20250806125937346

Sobre esta cuestión, debe señalarse que no basta revestir la calidad especial de presidente, director o gerente para atribuirle responsabilidad penal, sino que para ser autor de los delitos tributarios, se requiere que la persona física, además de ostentar la calidad de sujeto obligado que le asignan las propias leyes tributarias, se trate de alguien **que tenga determinados roles dentro de la empresa que supongan la potestad de actuar, en mayor o menor medida, en nombre y representación del ente jurídico**

(Borinsky, Mariano Hernán. "La responsabilidad penal de los administradores y de las sociedades por los ilícitos tributarios" en Bertazza, Humberto. Régimen sancionatorio en materia Tributaria. Libro homenaje a los 55 años de la obra científica y docente del profesor Vicente O. Díaz, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, año 2013, pág. 120) (el resaltado me pertenece).

La norma penal en trato exige que dichos sujetos hayan intervenido en la comisión del hecho como requerimiento constitucional vinculado con el derecho penal de acto (Silva Sánchez, J.M. "El actuar en lugar de otro en el Código Penal Español", en Percy García Caverio La responsabilidad penal de las personas jurídicas, órganos y representantes", Mendoza Ed. Jurídicas Cuyo, año 2004, pág. 288").

Teniendo en cuenta los lineamientos conceptuales expuestos, considero que a los fines de atribuir -o deslindar- responsabilidad penal por el hecho que aquí se investiga, no puede soslayarse en el análisis del caso la calidad especial requerida por el tipo penal, las





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 6365/2014/3/CA3

características personales de quien la ostenta y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fueron ejecutadas las acciones presuntamente delictivas.

Se agrega en el voto de cita dictado en esta causa que "Por otra parte, tal como sostuve recientemente con fecha 20.4.2021 en autos **"BUNGE ARGENTINA S.A. Y OTROS/EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA"** (Expte. N° FCB 8749/2019/CA1), no puede dejar de ponderarse que **la delegación de facultades y funciones** de los directores en cuadros medios y bajos de gestión y ejecución de las tareas empresariales **no excluye la responsabilidad penal por omisión de los directivos que conservan las facultades de actuación, vigilancia y control**. Tampoco excluye, por cierto, la responsabilidad individual de los delegados emergente de su intervención personal en la concreción del resultado.

Con ello se quiere significar que la obligación de supervisión en el ámbito de deberes especiales excluye la posibilidad de delegación total de la posición de garante y, por ende, en caso de verificarse la concurrencia de los elementos de las distintas categorías del delito, **da lugar a la atribución del resultado y a la responsabilidad por la omisión penalmente relevante**".

II. Sentado ello, sobre la base de la presentación efectuada por el Síndico Titular de la empresa Gamsur contador público Diego Thommen y de los elementos de prueba por él acompañados, considero que asiste razón a los apelantes en cuanto que, teniendo acreditada la materialidad del hecho, a estas alturas del proceso y con el grado de probabilidad que esta etapa requiere, resulta factible efectuar un juicio de mérito en orden a los

Fecha de firma: 06/08/2025

Alta en sistema: 07/08/2025

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#39307725#465526378#20250806125937346

extremos objetivos y subjetivos de la imputación penal que pesa en cabeza de los encartados Lago e Infante, que conduce a dictar su procesamiento conforme lo establece el art. 306 del CPPN.

En tal sentido, cabe aclarar que el procesamiento constituye una decisión jurisdiccional, de carácter provisional -puede ser revocada o modificada durante el curso de la instrucción y cuando la aparición de nuevos elementos así lo justifiquen (artículo 311 del CPPN)-, mediante la cual el juez, sobre la base de la prueba colectada, valorada conforme las reglas de la sana crítica racional, arriba a la convicción, sin necesidad de que exista certeza plena, respecto de la comisión de un hecho delictuoso y de la culpabilidad del imputado como partícipe en aquél (arts. 45 y 46 del Código Penal).

Por lo tanto, no requiere un grado intelectual de certeza para atribuir responsabilidad penal en autos, como refiere el Juez de la causa en su resolución, sino que tan simplemente **procede entonces en la medida en que exista probabilidad**, es decir, cuando -teniendo en cuenta el fin inmediato del proceso penal, cual es la búsqueda de la verdad real- los elementos de cargo existentes generen convicción suficiente respecto de la existencia del hecho ilícito y la responsabilidad penal del imputado.

*"Se trata de la valoración de elementos probatorios suficientes para producir probabilidad, aun no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir hacia la base del juicio. "...el procesamiento debe ser juicio provisional acerca de la posible culpabilidad o*







## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 6365/2014/3/CA3

*merecimiento de pena por parte del imputado, con respecto a un hecho penalmente relevante verificado en concreto, y apoyado en un conocimiento probable ante la existencia de elementos suficientes de convicción para dar paso a una acusación". (Jorge A. Clariá Olmedo, Derecho Procesal Penal, Tomo II, actualizado por Carlos Alberto Chiara Díaz, Ed. Rubinzal- Culzoni, pág. 500/507).*

Por ello, es bajo tales parámetros que debe valorarse el caso de autos y definirse la situación procesal de los imputados.

**III. Avocada a ello y luego del examen de los elementos de prueba obrante en autos, cabe señalar que, aunque las cuestiones contables e impositivas habrían sido delegadas al estudio contable "Busso", lo cierto es que de la lectura de los informes emitidos por la comisión fiscalizadora, conformada por los síndicos titulares de la parte pública -Dr. Roberto G. Dova y Cr. Diego H. Thommen-, cabe colegir que los imputados Lago e Infante, quienes desempeñaban el cargo de Directores de la empresa no habrían desconocido las maniobras ilícitas tendientes a evadir ardidosamente el pago de impuestos que aquí se investiga, sino que habrían consentido dicho accionar delictivo con pleno y cabal conocimiento de las consecuencias jurídico-penales derivadas de tales conductas.**

Así, del análisis de la documentación se advierte la existencia de una serie de maniobras e irregularidades vinculadas con el pago de diversos tributos y gravámenes - entre ellos, el impuesto al valor agregado- a la par de una preocupación por parte de los Síndicos sobre la delicada



situación y la gravedad de las maniobras efectuadas por la empresa.

En tal sentido, resulta relevante destacar que, entre las distintas observaciones efectuadas por los síndicos se alude a un estado general de cesación de pagos, cuyas deudas principales se vinculan no sólo con el incumplimiento con proveedores varios, **sino principalmente, con el pago de impuestos de IVA**, Ingresos Brutos, contribuciones de seguridad social, aportes a la seguridad social, aportes de obra social, ART, leasing bancarios y deudas con diversas entidades bancarias, tal como se desprende de los informes de fecha 17.04.2009 y 15.01.2009.

Cabe destacar las "Observaciones" efectuadas por la Comisión fiscalizadora no solo respecto de la reiteración de los incumplimientos mencionados en los anteriores informes, sino la transcripción textual de diversas normas del Régimen Penal Tributario en las que eventualmente se podría incurrir.

A modo de ejemplo, merece mención la cita y transcripción del art. 14 de la Ley 24.769 efectuada por los síndicos en el informe de fecha 17.04.2009 que alude a la responsabilidad que puede recaer sobre los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, y demás personas autorizadas que hubieren intervenido.

Igualmente, cabe subrayar las irregularidades verificadas en torno a los comprobantes de pago, como ser: pagos que exceden los límites previstos por ley (art. 130 de la Ley 20.744); que no cumplen con los requisitos legalmente establecidos en cuanto a forma y contenido





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 6365/2014/3/CA3

(falta de comprobantes respaldatorios o no poseen su correspondiente recibo o forma del receptor de los fondos y pagos irregulares que incluso pueden generar responsabilidad penal por fraude laboral (art. 21, 22 y 23 de la LCT), todo lo cual, **en lo que aquí interesa y atendiendo a la existencia de facturación apócrifa como modalidad delictiva, revelan la existencia de una seria falta de control como patrón común para facilitar maniobras delictivas y sobre las que los encartados estaban anoticiados.**

En efecto, de las observaciones del informe de fecha 18.06.2009 surge la continuidad y persistencia de irregularidades vinculadas con incumplimientos contractuales, civiles y laborales, resultando significativo a los fines de ponderar el conocimiento por parte de Lago e Infante del resto de las maniobras mencionadas tanto en los informes a los que se aludió precedentemente, y en otros anteriores, como ser los de fecha 15.9.2008 y 5.12.2008.

Cabe traer a colación las observaciones efectuadas por la Comisión Fiscalizadora en el informe de fecha 23.03.2010 en cuanto dejó sentado que *"Si bien en este período hemos advertido un incremento patrimonial, producto de las políticas de reducción de gastos y desendeudamiento encaradas por el nuevo directorio, seguimos viendo con preocupación la delicada situación financiera por la que atraviesa la empresa, producto del cobro diferido de los servicios prestados a la Municipalidad de Río Cuarto, los cuales por lo general se perciben con valores con fecha de pago de hasta ciento ochenta días a la fecha de emisión. Esta situación, sumada*

Fecha de firma: 06/08/2025

Alta en sistema: 07/08/2025

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#39307725#465526378#20250806125937346

a la falta de liquidez de la empresa y a la desactualización del canon mensual por la prestación del servicio de higiene urbana y recolección de residuos, genera altos costos financieros de canje de cheques y exponen a la empresa a incumplimientos en sus obligaciones tributarias y con sus proveedores.- 2) Las siguientes Ordenes de Pago fueron abonadas en efectivo, no cumplimentando lo dispuesto por el artículo N° 34 de la Ley N° 11.683 (L.P.T): a. O.P. N° 15.679 por \$ 5.400.- b. O.P. N° 15.552 por \$ 2.000.- c. O.P. N° 15.669 por \$ 4.639,51. **A la fecha del presente, la gerencia y el directorio han advertido esta situación y se han comprometido a dar cumplimiento a dicha normativa en lo sucesivo.**- 3) Queremos resaltar la buena predisposición del directorio y de la gerencia, que han ordenado la corrección anticipada a la fecha del presente informe de las observaciones presentadas por esta sindicatura. Algunas de estas observaciones han sido consideradas y aprobadas por actas de directorio N° 94, 109 y 110.- 4) Ratificamos las observaciones mencionadas en nuestro anterior informe de fecha 30/12/2009 en sus puntos 2), 3), 15) y 16) a cuyo efecto remitimos".

Es decir, como puede observarse, los directores Lago e Infante no solo tenían pleno y cabal conocimiento de cada una de las circunstancias reseñadas en los informes elaborados por los síndicos, sino que además habrían manifestado comprometerse a dar cumplimiento a las normas fiscales que, en forma sistemática se estaban omitiendo al menos hasta el momento.





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 6365/2014/3/CA3

Finalmente, en el informe de fecha 14.01.2011 - esto es, cuando Lago e Infante aún se encontraban a cargo de la firma investigada en calidad de Directores- los síndicos reiteraron las observaciones expuestas tanto en torno a **irregularidad de los pagos del impuesto al valor agregado** como en lo que atañe a las deficiencias de los comprobantes de pago, en especial, relacionadas con las omisiones de presentarlos físicamente, sin tener adjunto el recibo correspondiente, ni que estén firmados por los receptores de los fondos.

En orden a lo expuesto, no puede soslayarse que estos informes elaborados por la Comisión de Síndicos, se tratan de **dictámenes técnicos y legales que deben ser presentados**, en asamblea ordinaria para la revisión y control de la marcha de la empresa. En función de ello, no puede soslayarse que todos los informes mencionados habrían sido presentados a los miembros del directorio en forma trimestral lo cual revela el cabal conocimiento de su contenido por parte de los directores Lago e Infante.

Establecido ello, en cuanto a la injerencia de los imputados en la toma de decisiones y su consecuente responsabilidad por las mismas, cabe poner foco en la declaración testimonial receptada con fecha 14/8/2024 al contador Diego Hernán Thommen, quien a la fecha de los hechos se desempeñó como síndico de la empresa GAMSUR SEM.

Al ser preguntado respecto quienes se ocupaban de las órdenes de compras y elección de proveedores de la empresa, el testigo respondió que "...la decisión la tomaba el directorio titular en cuanto a la operatividad diaria y cuestiones administrativas y a través de la gerencia se encargaba de ejecutar esas decisiones...". Agregó luego que

Fecha de firma: 06/08/2025

Alta en sistema: 07/08/2025

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#39307725#465526378#20250806125937346

"Respecto de las órdenes de pago había varias etapas y varias personas involucradas en el proceso de compra, como mencionó en la primera respuesta la decisión la tomaba el directorio (avalado por el ejecutivo municipal) o tomada por el ejecutivo municipal y ejecutada por el directorio...".

Señaló en el mismo sentido el testigo Thommen respecto las decisiones de índole económico que "la sindicatura tomaba conocimiento de las decisiones que estaban plasmadas en actas, entendiendo que por el rol del directorio toda decisión que involucrara un movimiento económico debía ser avalada por el directorio, pero desconocía si en la toma de decisiones el directorio era un mero ejecutor de lo que decidiera el ejecutivo municipal o si las decisiones se tomaban a título personal...".

De tal modo, el cúmulo probatorio permite entonces hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y la querellante ARCA -ex AFIP- en cuanto consideran que existen elementos suficientes que acreditan, con el grado de probabilidad de esta etapa que se transita, la responsabilidad y participación de los imputados Lago e Infante en el hecho que aquí se investiga, toda vez que los nombrados conocían la situación económica y financiera que atravesaba la empresa, como así también la preocupación que generaba a los síndicos la cantidad de irregularidades detectadas y las posibles consecuencias penales de ese accionar. Ello permite sostener que no serían ajenos a las maniobras ilícitas que se les achacan, consistentes en la utilización de facturas apócrifas para reducir ilícitamente la base de la declaración jurada correspondiente al





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 6365/2014/3/CA3

impuesto al valor agregado del año 2010 y de tal forma evadir en forma agravada el tributo por la suma de pesos tres millones quinientos cincuenta y cuatro mil doscientos cincuenta y tres con setenta y cinco centavos (\$3.554.253,75) .

Reitero en este punto que -tal como oportunamente lo sostuvo esta Alzada-, no puede dejar de ponderarse que la delegación de facultades y funciones de los directores en cuadros medios y bajos de gestión y ejecución no excluye la responsabilidad penal por omisión de los directivos, quienes conservan en principio las facultades de actuación y control.

De este modo, estando acreditado que los encartados eran los directivos de la empresa y estaban alcanzados por el deber de vigilancia, se colige que no resulta suficiente la invocación de un supuesto desconocimiento de la materia tributaria para deslindar su responsabilidad por los ilícitos cometidos bajo su supervisión, puesto que se trata de compromisos inherentes a la naturaleza de las funciones y cargos asumidos.

En virtud de todo ello, el plexo probatorio autoriza como dije a emitir un juicio de mérito respecto de los encartados y concretamente en este caso y con el grado de probabilidad exigido en la instancia, alcanza para el dictado de una decisión provisional como la del procesamiento en los términos del artículo 306 del CPPN.

**IV.** Por todo ello, considero que debe revocarse la resolución dictada con fecha 30 de agosto de 2024 por el Juez Federal de Río Cuarto, en cuanto dispuso la falta de mérito de José Ernesto Lago y Rubén Omar Infante y, de acuerdo al análisis efectuado corresponde **ordenar su**

Fecha de firma: 06/08/2025

Alta en sistema: 07/08/2025

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#39307725#465526378#20250806125937346

**procesamiento** en carácter de autores del delito de evasión agravada previsto por el art. 2 del régimen penal tributario conf. Ley 24.769 -hoy Ley 27.430- art. 45 del CP y art. 306 del CPPN).

Asimismo, atento la modificación de la situación procesal de los encartados y a los fines de garantizar la doble instancia y el derecho al recurso, deberá el instructor expedirse en torno a la procedencia o no de la prisión preventiva de los imputados (art. 312 del CPPN) y el embargo o inhibición de bienes (art. 518 del CPPN).

Por último, estimo conveniente reiterar la recomendación efectuada al Juez de primera instancia para que, atento el tiempo transcurrido, imprima la máxima celeridad al trámite de la causa y adopte las medidas procesales necesarias para posibilitar la pronta elevación de la causa a juicio. Sin costas (arts. 530 y 531 del CPPN). Así voto.

**El señor Juez de Cámara, doctor Abel G. Sánchez Torres, dijo:**

Que en razón de coincidir con los fundamentos expuestos por la señora Juez preopinante, Dra. Graciela Montesi, voto en igual sentido. Así voto.

**La señora Jueza de Cámara, doctora Liliana Navarro, dijo:**

Comparto el criterio expuesto por la señora Jueza del primer voto y, en consecuencia, me pronuncio en el mismo sentido. Así voto.

Por todo lo expuesto,

**SE RESUELVE:**

**I. REVOCAR** la resolución dictada con fecha 30 de agosto de 2024 por el Juez Federal de Río Cuarto en cuanto







## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 6365/2014/3/CA3

dispuso la falta de mérito de **José Ernesto Lago y Rubén Omar Infante** y, en consecuencia, **ordenar su procesamiento** en carácter de autores del delito de evasión agravada previsto por el art. 2 del régimen penal tributario de la Ley 24.769 -hoy art. 279 de la Ley 27.430- art. 45 del CP y art. 306 del CPPN) debiendo el Juez federal interviniente expedirse en orden a la procedencia o no de la prisión preventiva de los imputados (art. 312 del CPPN) y el embargo o inhibición general de bienes (art. 518 del CPPN), conforme lo considerado.

**II. Recomendar** al Juez de primera instancia que, atento el tiempo transcurrido, imprima la máxima celeridad al trámite de la causa y adopte las medidas procesales necesarias para posibilitar la pronta elevación de la causa a juicio.

**III.** Sin costas (arts. 530 y 531 del CPPN).

**IV.** Regístrese y hágase saber. Cumplimentado publíquese y bajen.

GRACIELA MONTESI  
JUEZ DE CAMARA

ABEL SANCHEZ TORRES  
JUEZ DE CAMARA

LILIANA NAVARRO  
JUEZA DE CAMARA

MARIO OLMEDO  
SECRETARIO DE CAMARA

Fecha de firma: 06/08/2025

Alta en sistema: 07/08/2025

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#39307725#465526378#20250806125937346